

La Alianza Progresista denuncia la represión transnacional y los crímenes en las cárceles de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua

Adoptada el 19 de septiembre de 2025 Buenos Aires, Argentina

La Alianza Progresista denuncia ante la opinión pública internacional que la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua ha extendido su brazo represivo más allá de las fronteras nacionales.

El asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, el 19 de junio, en su domicilio en San José, Costa Rica, donde vivía exiliado desde 2018, es la expresión más grave de la represión transnacional en curso.

Se han producido al menos tres ataques previos contra figuras de la oposición nicaragüense, uno de ellos mortal, contra Rodolfo Rojas, quien también fue secuestrado en Costa Rica, donde se había refugiado, y cuyo cuerpo fue hallado posteriormente en Honduras.

Al mismo tiempo, la represión dentro de Nicaragua continúa y ahora también alcanza a simpatizantes del propio régimen. Ello ocurre en medio de la crisis que enfrenta la dictadura respecto de la sucesión de Daniel Ortega.

El número total de presos políticos supera los setenta (70), y más de treinta (30) de ellos figuran como desaparecidos.

Sigue vigente un estado de emergencia en el que se han vulnerado todas las libertades y donde el secuestro de ciudadanos es un hecho cotidiano.

El 25 de agosto se informó del fallecimiento en prisión de Mauricio Alonso Petrie, secuestrado el 18 de julio de este año. El 29 del mismo mes murió, en circunstancias similares, Carlos Cárdenas, quien había sido secuestrado el 17 de julio. Con ellos, ya son siete los presos políticos fallecidos bajo custodia del régimen. En febrero de 2022, Hugo Torres, vicepresidente de UNAMOS, murió en condiciones similares, y en mayo de 2019 Eddy Montes fue asesinado en la cárcel. Santos Flores en 2021 y José Modesto Solís en diciembre de 2023 también murieron como presos políticos. Humberto Ortega, exjefe del Ejército, falleció en septiembre de 2024, sirviendo el hospital como su prisión.



Las reformas constitucionales realizadas recientemente, tras la reforma general de febrero de este año, solo representan una mayor concentración de poder en la familia Ortega-Murillo, intentando así legitimar su dictadura.

La Alianza Progresista reitera que el poder totalitario y dinástico de una sola familia constituye un grave retroceso para Nicaragua y una seria amenaza para la estabilidad y la democracia en la región, al formar parte de la ola autoritaria que avanza en nuestros países.

La Alianza Progresista:

- Exige la liberación de todas y todos los presos políticos en Nicaragua.
- Exige que el régimen nicaragüense cese la represión, restaure las libertades y derechos civiles y garantice el retorno seguro de exiliados y deportados.
- Llama a los gobiernos progresistas a aplicar medidas políticas, diplomáticas y financieras destinadas a presionar a la dictadura Ortega-Murillo para establecer el respeto de los derechos humanos y una transición democrática.
- Convoca a todas las fuerzas progresistas del mundo a reforzar su apoyo a las fuerzas democráticas y progresistas y al pueblo de Nicaragua en su lucha por la democracia, el Estado de derecho y el respeto de la dignidad humana.